



OTROS
DOCUMENTOS

2025



La contratación pública en Australia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.



OTROS
DOCUMENTOS

27 de junio de 2025
Sídney

Este estudio ha sido realizado por
Belén Figuerola Santos

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

<http://australia.oficinascomerciales.es>

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224250205



Índice

1. Introducción	4
2. La contratación pública en Australia	6
2.2. El proceso de la contratación de la Commonwealth	12
2.2.1. Fases de la contratación	12
2.2.2. Acuerdos especiales	13
2.3. Las alianzas	13
2.4. Discrepancias y quejas	15
2.4.1. Reclamaciones previstas en la LCP (Revisión Judicial) 2018	15
2.4.2. Reclamaciones no cubiertas por la LCP (Revisión Judicial) 2018	16
3. Cuestiones transversales	17
3.1. Barreras de entrada	17
3.1.1. Preferencias locales	18
3.2. Sostenibilidad y diversidad	19
3.2.1. Medio ambiente	19
3.2.2. Sociales	19
3.2.3. Gobernanza	20

1. Introducción

La contratación pública es el proceso de adquisición de bienes y servicios demandados por una entidad o institución pública. El proceso comienza cuando se ha identificado una necesidad y tomado una decisión sobre su adquisición. La contratación continúa a través de los procesos de evaluación de riesgos, análisis de los mercados y sus cadenas de suministro, búsqueda y evaluación de soluciones alternativas y finaliza en la adjudicación e información de un contrato. Por tanto, se puede concluir que, con independencia del país todo proceso de contratación pública es, en sí mismo, complejo.

Australia es un país caracterizado por disponer de una estructura administrativa descentralizada, una población ligeramente superior a los 27 millones de habitantes¹ que se asienta en su mayor parte (64 %) en alguna de las cinco principales ciudades del país: Sídney, Melbourne, Brisbane, Adelaida y Perth cada una situada en un estado diferente. Estas notas identificativas deben tenerse en cuenta a la hora de abordar el mercado porque su dispersión y la heterogeneidad de su normativa tienen un impacto significativo tanto en el coste como en la complejidad procedimental del proceso de contratación.

Australia dispone de tres niveles de gobierno: i) la Commonwealth (federal), ii) el estatal y territorial y iii) el nivel local. Cada nivel de gobierno tiene sus propias competencias, aunque en algunos casos estas son compartidas.

El Gobierno federal legisla para toda Australia y dispone de competencias exclusivas en defensa, política exterior, censo nacional, moneda, faros, buques, balizas y boyas, derechos de autor, ciudadanía, la capital nacional, servicio público federal, recaudación de aduanas (impuestos sobre mercancías importadas) y moneda. El Parlamento federal puede, finalmente, legislar para los territorios, incluida su representación en el Parlamento federal.

Adicionalmente existen seis gobiernos estatales y dos territoriales con potestad para legislar en sus respectivos estados: *New South Wales*, *Victoria*, *Queensland*, *South Australia*, *Western Australia* y *Tasmania* y territorios continentales, *Australian Capital Territory* y *Northern Territory*. Los parlamentos de los estados y territorios elaboran leyes que se aplican dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales. Son competencias de interés para los estados y territorios las referidas a las escuelas, hospitales, carreteras y ferrocarriles, transporte público, servicios públicos como electricidad y abastecimiento de agua, minería, agricultura, bosques, servicios comunitarios, consumo, policía, prisiones, servicios de ambulancia.

¹ [27.204.809 en junio de 2024.](#)

Finalmente, existen más de 500 ayuntamientos, denominados consejos, municipios o condados, que elaboran leyes locales (reglamentos) para su región o distrito que hacen referencia a carreteras locales, senderos, carriles bici, señalización e iluminación de las calles, gestión de residuos, incluida la recogida de basuras y el reciclado, aparcamiento, instalaciones recreativas como parques, campos deportivos y piscinas, instalaciones culturales como bibliotecas, galerías de arte y museos, servicios como guarderías y residencias de ancianos, alcantarillado, urbanismo, autorizaciones e inspecciones de obras, programas de cuidado del suelo y la costa, control de animales domésticos².

Según datos de la OCDE (2021), el [gasto anual en contratación pública](#) de Australia equivale al **17,9 % de su PIB**, unos 240.370 MUSD (223.743 MEUR). Es el país de la OCDE que dedica el [mayor porcentaje de sus presupuestos](#), el **45,1 %** a contratación pública (2021).

La Commonwealth ofrece una publicación centralizada, en [AusTender](#), de las oportunidades de negocio del Gobierno australiano, los planes anuales de contratación y los contratos adjudicados de cualquier entidad gubernamental a nivel federal. La cifra de los [contratos publicados en 2024](#) ascendió a 450.433 MAUD (unos 260.000 MEUR). Por su parte los distintos estados y territorios de Australia disponen de sus propias autoridades de contratación pública y cuentan con su propio portal de licitaciones públicas.

Aunque los procesos se pueden considerar transparentes, se caracterizan por su larga duración (el plazo medio de una licitación es de 17 meses), su elevado coste (entre un 0,5 % y un 2 % del valor del contrato), así como cierta incertidumbre respecto al calendario de proyectos. Adicionalmente, habría que considerar las normas específicas que contienen preferencias locales, las destinadas a favorecer la sostenibilidad y diversidad o las estrictas normas anticorrupción y de transparencia que aumentan la complejidad del proceso y el acceso, en particular a las empresas extranjeras y entre ellas a las pymes.

Por tanto, a la hora de abordar el mercado australiano de contratación pública no debemos olvidar que además de ser muy lejano, está fraccionado, con competencias descentralizadas, heterogéneas y dispersas en distintos estados y territorios. Desde el punto de vista empresarial, los estados más relevantes para los negocios, por el peso de su economía y su población, son: Nueva Gales del Sur (Sídney), Victoria (Melbourne) y el estado de Queensland (Brisbane), que en estos momentos puede reportar oportunidades adicionales de cara a los Juegos Olímpicos de 2032.

² En este documento nos concentraremos únicamente en dos niveles de gobierno: Commonwealth y el estatal y territorial.

2. La contratación pública en Australia

2.1. Normativa

El acceso al mercado de la contratación pública en Australia se rige por las normas de contratación recogidas a nivel de la Commonwealth, estatal/territorial y local. Estas a su vez deben incorporar los compromisos que cada uno de ellos haya asumido en los acuerdos internacionales.

A nivel internacional, Australia ha firmado diversos acuerdos algunos específicos en materia de contratación como el Acuerdo de Contratación Pública de la OMC y otros como los Tratados de Cooperación y Libre Comercio que tiene suscritos con otros países o grupos de países –[CPTTP](#), [RCEP](#), [AANZFTA](#) y [Nueva Zelanda](#), [Singapur](#), [Estados Unidos](#), [Tailandia](#), [Chile](#), [Malasia](#), [Corea](#), [Japón](#), [China](#), [Hong Kong](#), [Perú](#) e [Indonesia](#)– que incluyen cláusulas o capítulos relativos a la materia de contratación pública. No obstante, el acceso al mercado que incorporan algunos de estos acuerdos varía en términos de bienes, servicios afectados o de los umbrales, el importe en dólares a partir de los cuales se activa la obligación de permitir a las empresas competir.

A nivel federal, la Financial Framework ([Supplementary Powers](#)) Act 1997³ que regula el marco para la correcta gestión del dinero y los bienes públicos por parte del brazo ejecutivo de la Commonwealth, establece que cada organismo oficial se debe encargar de llevar a cabo su propio proceso de contratación. Por tanto, cada organismo público es el responsable de llevar a cabo su propio proceso de contratación para las competencias que le son propias.

Finalmente, cada estado y territorio dispone de su propia legislación en materia de contratación pública, aunque el enfoque aplicado en todas las jurisdicciones es muy similar. Así, por ejemplo, el estado de Nueva Gales del Sur estaría regulado por la [Public Works and Procurement Regulation 2019](#), el de Victoria por la [Financial Management Act 1994 \(Vic\)](#), etc.

2.1.1. Normativa internacional

A Australia le es aplicable un conjunto de normas de contratación pública derivadas de los distintos acuerdos internacionales suscritos tanto a nivel plurilateral como bilateral.

A nivel plurilateral, Australia se convirtió en el miembro número 48 del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio ([ACP](#)) cuando el Acuerdo entró en vigor en Australia el 5 de mayo de 2019. Esta *plurilateralidad* significa que solo es vinculante para los

³ Ley del Marco Financiero (poderes complementarios).

Miembros de la OMC que son parte en él y por tanto han aceptado estar obligados por el mismo. Actualmente consta de 19 Partes, (que abarcan a 49 miembros de la OMC si se cuenta como una sola Parte a la Unión Europea y sus 27 Estados miembros). Otros 36 miembros/observadores de la OMC y varias organizaciones internacionales participan como observadores en el Comité de Contratación Pública.

El objetivo fundamental del ACP es la apertura mutua de los mercados de contratación pública entre sus partes. Como resultado de varias rondas de negociaciones, las partes del ACP han abierto a la competencia internacional las actividades de contratación pública, cuyo valor se estima en más de 1,7 billones de dólares americanos anuales (es decir, a proveedores de las partes del ACP que ofrecen bienes, servicios o servicios de construcción).

El ACP se compone principalmente de dos partes: el texto del Acuerdo y las listas de compromisos de acceso al mercado de las partes. El texto del Acuerdo establece normas que disponen que se han de garantizar condiciones de competencia abiertas, equitativas y transparentes en la esfera de la contratación pública. No obstante, esas normas no se aplican automáticamente a todas las actividades de contratación de cada Parte. Antes bien, las listas de cobertura desempeñan un papel decisivo en la determinación de si una actividad de contratación está abarcada o no por el Acuerdo. Solo están comprendidas por el Acuerdo las actividades de contratación llevadas a cabo por entidades que contratan bienes, servicios o servicios de construcción de un valor superior a determinados valores de umbral. Tanto las entidades como los bienes, servicios y servicios de construcción deben estar incluidos en el Acuerdo.

Las listas y umbrales de compromisos aceptados por Australia se pueden encontrar [aquí](#).

Para el caso de Australia, las listas de organismos públicos incluyen:

- [64 instituciones](#) de gobierno de nivel federal, quedando expresamente excluido el departamento de defensa, con los siguientes umbrales:

	SDR	AUD
○ Bienes y servicios	130.000	255.000
○ Servicios de construcción	5.000.000	9.808.000

- [229 entidades](#) de nivel subfederal (pertenecientes a los estados y territorios)

	SDR	AUD
○ Bienes y servicios	355.000	696.000
○ Servicios de construcción	5.000.000	9.808.000

- [26 entidades](#) gubernamentales.

	SDR	AUD
○ Bienes y servicios	400.000	780.000
○ Servicios de construcción	5.000.000	9.808.000

Adicionalmente, se considera que en el ACP quedan incluidos todos los bienes y servicios estableciéndose, no obstante, una lista de excepciones de [57 bienes](#) y [4 servicios](#).

Asimismo, se acuerda la inclusión de todos los [servicios de construcción](#) con la excepción de los servicios de dragado y los servicios de construcción contratados por el Departamento Federal de Transportes o los contratados en su nombre.

De cara al futuro no se debe olvidar que la Unión Europea y Australia iniciaron las negociaciones para la consecución de un Acuerdo de Libre Comercio en 2018 en el que está previsto incorporar un capítulo de contratación pública que mejore las actuales condiciones de acceso al mercado previstas en el Acuerdo de Contratación Pública de la OMC.

2.1.2. Normativa federal

A nivel federal, las licitaciones públicas se rigen por las Commonwealth Procurement Rules ([CPRs](#)) publicadas por el Ministerio de Finanzas australiano al amparo de la sección 105B(1) de la Public Governance, Performance and Accountability Act 2013 ([PGPA](#))⁴. Estas directivas, que se enmarcan dentro del denominado [Resource Management Framework](#), son de obligada aplicación en las contrataciones del gobierno federal y sirven de guía para los estados que, como se ha indicado, tienen flexibilidad y capacidad normativa.

El Departamento de Finanzas es el principal responsable de establecer las normas de contratación pública de la Commonwealth. Además de las CPR, emite políticas y directrices para la contratación pública, como [las guías de gestión de recursos](#) que tratan de la responsabilidad, la indemnización, las condiciones de pago y otras cuestiones que deben aplicarse en la contratación pública y los contratos.

Por otra parte, como veremos más adelante, la política de contratación pública no es una política aislada, sino que se ve afectada por otra serie de políticas desarrolladas por distintos organismos gubernamentales como el Departamento de Industria, Innovación y Ciencia responsable de la política de participación de la industria australiana, con especial incidencia en las políticas de apoyo a la industria local.

Anticipar también que la Ley de Contratación Pública (Revisión Judicial) de 2018 ([LCP](#)) otorga a los proveedores importantes derechos para impugnar un proceso de contratación pública por contravención de las CPR.

⁴ La PGPA reúne los elementos fundamentales del marco financiero de la Commonwealth en un solo instrumento legislativo.

Los principios que inspiran la contratación pública incluidos en las CPR son:

- I) *value for money*;
- II) competencia;
- III) eficiencia, eficacia y ética;
- IV) transparencia y rendición de cuentas; y
- V) adecuada gestión de riesgos.

Por otro lado, los sistemas de licitación contemplados en la CPR son dos:

- I) Procedimiento abierto (*open tender*): publicación de invitación a presentar ofertas (*open approach to market*).
- II) Procedimiento restringido (*limited tender*): por invitación, en circunstancias excepcionales y/o cuando el proceso no cumple con los requisitos de procedimiento abierto. Se establecen unas condiciones específicas para estos casos.

Los umbrales de contratación recogidos en las CPR son los siguientes (incluido GST-equivalente al IVA-):

- I) para las entidades no corporativas de la Commonwealth, excepto para la contratación de servicios de construcción, el umbral de contratación es de 80.000 AUD;
- II) para determinadas entidades corporativas de la Commonwealth –distintas de las relacionadas con la adquisición de servicios de construcción– el umbral de adquisición es de 400.000 AUD;
- III) para las adquisiciones de servicios de construcción por parte de las entidades correspondientes, el umbral de adquisición es de 7,5 millones de AUD.

Las CPR son revisadas anualmente. El 1 de julio de 2024 entraron en vigor las últimas CPR que incluyen algunos aspectos novedosos relativos a:

- I) Código de Conducta para proveedores de la Commonwealth;
- II) mejoras para las pymes;
- III) comportamiento ético;
- IV) mejora en la transparencia.

2.1.1. Normativa estatal y territorial

Las CPR están concebidas para aplicarse a las entidades de la Commonwealth, pero además sirven de guía a la normativa estatal y territorial. Los estados y territorios tienen su propia legislación que regula la forma en que sus organismos públicos llevan a cabo la contratación pública. No obstante,

aunque las normativas de contratación pública federal y estatal difieren en algunos detalles, en general tienen objetivos similares pues ambos niveles pretenden garantizar la transparencia, la equidad y la competencia. Las principales diferencias entre estados y territorios residen en:

- El valor del umbral de acceso: Cada estado tiene su [propio umbral de](#) valor para la contratación pública, a partir del cual se requiere una licitación pública.

UMBRALES APLICABLES POR COMMONWEALTH Y ESTADOS (AUD)

Gobierno	Bienes y servicios	Servicios de construcción
Commonwealth	80.000	7,5 millones
Victoria	150.000	1 millón
Nueva Gales del Sur (NSW)	250.000	1 millón
Queensland	250.000	1 millón
Western Australia	250.000	2 millones
South Australia	220.000	9 millones
Tasmania	250.000	1,5 millones
Australian Capital Territory	250.000	1,5 millones
Northern Territory	500.000	1,5 millones

Fuente: Elaboración propia.

- El procedimiento de contratación: Los procedimientos de contratación pueden variar entre los estados, incluyendo la licitación abierta y la contratación directa.
- Requisitos de transparencia: Los requisitos de transparencia en la contratación pública pueden variar entre los estados y territorios, incluyendo la publicación de información sobre los contratos adjudicados y los proveedores.

Los Estados y territorios cuentan con un organismo central que establece las normas de contratación y lleva a cabo la mayor parte de esta. Los organismos públicos que realizan un volumen considerable de adquisiciones (como los departamentos de sanidad) suelen tener un mayor control sobre sus propias adquisiciones. Al igual que ocurre en la Commonwealth, existen instrucciones del Tesorero o similares que proporcionan más orientaciones sobre la política de contratación pública.

Dado que la contratación pública en Australia es un tema complejo y puede variar dependiendo del correspondiente estado y territorio, es recomendable consultar con la autoridad de contratación pública correspondiente para obtener información específica y actualizada. En la tabla siguiente se pueden consultar las distintas webs de las entidades de contratación a nivel estatal y federal en las que se incorpora la normativa de contratación pública para cada uno de ellas.

ENTIDADES DE CONTRATACIÓN

Estados y territorios

Gobierno	Entidad
Victoria	Buying for Victoria
Nueva Gales del Sur (NSW)	buy NSW
Queensland	ForGov Queensland
Western Australia	Western Australia Procurement
South Australia	Buying4SA
Tasmania	purchasingTas
Australian Capital Territory	ProcurementACT
Northern Territory	Northern Territory Procurement

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, indicamos las páginas web donde se pueden consultar las licitaciones; una por cada estado y territorio, dando así cumplimiento a la obligación de publicidad de la contratación.

PÁGINAS WEB DE CONSULTA DE LICITACIONES EN AUSTRALIA

Estados y territorios

Gobierno	Web
Victoria	https://tenders.nsw.gov.au/
Nueva Gales del Sur (NSW)	https://www.tenders.vic.gov.au/tenders/index.do
Queensland	https://www.hpw.qld.gov.au/qtenders/
Western Australia	https://www.tenders.sa.gov.au/
South Australia	https://www.tenders.wa.gov.au/
Tasmania	https://www.tenders.tas.gov.au/
Australian Capital Territory	https://tenders.act.gov.au/ets/index.do
Northern Territory	https://nt.gov.au/community/grants-and-volunteers/grants/grants-directory

Fuente: Elaboración propia.

2.2. El proceso de la contratación de la Commonwealth

Todos los contratos adjudicados por organismos gubernamentales con dinero público o relacionados con bienes públicos estarán generalmente regulados (o cubiertos) por las normas de contratación pública.

En virtud de las CPR, las actividades que no se consideran actividades de contratación «cubiertas» son: subvenciones; inversiones y desinversiones; ventas mediante licitación; préstamos; compras de bienes o servicios para reventa, o de bienes o servicios utilizados en la producción de bienes para reventa; cualquier derecho de propiedad no adquirido mediante el gasto de dinero público (por ejemplo, el derecho a presentar una reclamación por negligencia); nombramientos estatutarios o ministeriales; contratación de empleados; o acuerdos entre entidades no corporativas de la Commonwealth en los que no se haya recurrido a otros proveedores.

2.2.1. Fases de la contratación

El proceso de contratación en Australia se desarrolla a lo largo de estos pasos:

- Planificación de la contratación basándose en una necesidad identificada.
- Determinación del alcance de la contratación
- Determinación del método de contratación
- Preparación para abordar el mercado
- Abordar el mercado
- Evaluación de las candidaturas y conclusión del proceso de licitación.

Existen dos **métodos** entre los que puede elegir el órgano público a la hora de **contratar**:

- **Licitación abierta:** Implica un enfoque abierto al mercado en una o varias fases (por ejemplo, una manifestación de interés seguida de una solicitud de oferta). Es el procedimiento “por defecto” para todas las contrataciones cuyo valor supere los umbrales correspondientes (80.000 AUD para las entidades no corporativas de la Commonwealth). Existe la obligación de anunciarse en AusTender.
- **Licitación limitada:** Cuando el proceso no cumple con las normas de la licitación abierta, la entidad competente se pone en contacto con uno o más proveedores potenciales para que presenten ofertas. Puede aplicarse a cualquier contratación por debajo de los umbrales pertinentes, siempre que represente una buena relación calidad-precio. Únicamente se podrá utilizar en contrataciones por encima de los umbrales pertinentes cuando lo permitan específicamente las CPR. El valor y las razones de la fuente directa deben documentarse y comunicarse a AusTender.

Existen algunas excepciones a la obligación de anunciar o convocar un procedimiento competitivo. La asignación directa está permitida en circunstancias limitadas, como:

- cuando, en respuesta a una licitación, no se haya recibido ninguna oferta adecuada;
- por razones de extrema urgencia;

- en el caso de adquisiciones realizadas en condiciones excepcionalmente ventajosas que solo se producen a muy corto plazo –como en el caso de enajenaciones inusuales o propuestas innovadoras no solicitadas–, en los últimos años, todos los estados y territorios han publicado directrices para la presentación y evaluación de propuestas no solicitadas, o
- cuando los bienes o servicios solo puedan ser suministrados por una empresa determinada y no exista una alternativa razonable.

2.2.2. Acuerdos especiales

Acuerdos marco y central de compras

En estos casos se designa a un organismo como principal para llevar a cabo una [contratación coordinada](#) o de toda la administración. En la Commonwealth, el organismo principal suele ser el Ministerio de Hacienda.

Asociaciones público-privadas (empresas conjuntas)

Los organismos públicos (independientemente de que formen parte o no de una empresa conjunta) suelen estar sujetos a normas de contratación menos estrictas que los departamentos gubernamentales. Sin embargo, en la práctica tienden a aplicar normas de contratación coherentes con las que se aplican a los organismos públicos. La mayoría de estos organismos están sujetos a la obligación de hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos y a otros requisitos que, por lo general, se traducen en políticas que les obligan a llevar a cabo contrataciones públicas de manera muy similar a la de otros organismos públicos. Este es el caso de las asociaciones público-privadas ([APP](#)).

Las APP no suelen establecerse con el requisito de que se rijan por las normas de contratación pública a la hora de comprar, pero la responsabilidad por el uso de los recursos públicos influye en la forma en que la APP lleva a cabo la contratación. En el ámbito de la Commonwealth, las directrices publicadas en virtud de la PGPA incluyen obligaciones de rendición de cuentas cuando los funcionarios cooperen con otros (incluidos los participantes en APP) para lograr objetivos comunes, siempre que sea factible.

2.3. Las alianzas

Dada la complejidad de algunos proyectos públicos que se han licitado en Australia se considera importante abordar una modalidad de participación en las licitaciones de grandes proyectos en Australia: las alianzas, y la filosofía detrás de las mismas. Estas han evolucionado con el tiempo hasta convertirse en un método de contratación utilizado para ejecutar con éxito proyectos arriesgados y complejos.

La regulación de las alianzas en Australia se basa en las [*National Alliance Contracting Guidelines*](#), que esbozan los principios y prácticas de los proyectos de construcción en colaboración. Las alianzas están diseñadas para mejorar los contratos de construcción tradicionales.

En un contrato de alianza, el propietario y los participantes no propietarios trabajan juntos para determinar, en colaboración, la mejor solución y ejecución para un proyecto. Las alianzas ponen en común recursos y competencias, y fomentan la colaboración entre las partes interesadas.

Entre las ventajas de este tipo de participación en las licitaciones públicas destacan: ahorro de costes, finalización más rápida de los proyectos y mejora de la resolución de problemas. Por ello, la decisión de recurrir a la alianza como marco para la ejecución de un proyecto depende del tamaño, la naturaleza y la complejidad del proyecto, así como de los participantes. El *alliancing* se basa, por tanto, en principios de buena fe y confianza, y en un planteamiento abierto de los costes.

Con el fin de promover los objetivos de la alianza, es habitual que los participantes designen a un facilitador independiente (asesor o asesores) para que les ayude durante el proceso de contratación y, posteriormente, en la fase de ejecución del proyecto. Así, por ejemplo, durante la *fase de taller* y documentación de un proyecto, la función principal del facilitador suele ser ayudar a los participantes de la alianza:

- a crear un entorno de confianza, cooperación, comunicación abierta y honesta y flexibilidad,
- implementar talleres para desarrollar un enfoque de grupo para la identificación de metas y objetivos, los intereses de las partes a participar en la licitación, los requisitos de rendimiento funcional y los riesgos y limitaciones.

Entre los factores que impulsan el establecimiento de una alianza como marco para la ejecución de un proyecto figuran los siguientes:

- la capacidad de aunar eficazmente conocimientos, competencias y recursos de varias partes con diferentes tipos de competencias
- capacidad para seleccionar al "mejor equipo" para la ejecución de las obras y la prestación de los servicios
- alineación de objetivos
- mayor posibilidad de superar los niveles de rendimiento exigidos y obtener una mayor recompensa
- oportunidades de economías de escala y mayores márgenes de beneficio.

La alianza se debe tener en cuenta cuando una empresa decide participar en un proyecto que es técnicamente complejo o cuando sea difícil definir con precisión el "producto" final. Por ejemplo, cuando el diseño es un elemento clave y no es posible completarlo antes de la licitación o en el caso de que vaya a existir una relación a largo plazo. No obstante, el factor determinante debería ser si las partes están dispuestas y son capaces de trabajar de la manera cooperativa que se

requiere para que una alianza tenga éxito, ya que son acuerdos que se enfocan a proyectos complejos o para relaciones a largo plazo.

2.4. Discrepancias y quejas

Finalmente, cabe destacar que existe un mecanismo de denuncia para el caso de que se descubra o se considere que ha existido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso de licitación. En estos casos se está en el derecho de plantear una queja o reclamación a la entidad competente.

2.4.1. Reclamaciones previstas en la LCP (Revisión Judicial) 2018

La Ley de Contratación Pública (Revisión Judicial) de 2018 establece un mecanismo de denuncia independiente para los procesos de contratación pública. La Ley exige a las autoridades contables de las entidades pertinentes de la Commonwealth que investiguen formalmente las quejas que se presenten de conformidad con la Ley, y que suspendan las contrataciones durante la investigación de la queja, a menos que exista un certificado de interés público. La Ley también impone a los proveedores la obligación de tomar medidas razonables para resolver la queja con la entidad pertinente de la Commonwealth antes de emprender acciones ante el Tribunal Federal de Circuito y Familia de Australia.

La Ley se aplica a las infracciones de las normas CPR relativas a las adquisiciones cubiertas por las entidades pertinentes de la Commonwealth.

Si la denuncia es válida con arreglo a la Ley, deberá tramitarse de conformidad con las orientaciones de la [Guía de Gestión de Recursos 422](#). En virtud de la Ley, la autoridad responsable debe iniciar una investigación y elaborar un informe de la investigación. En caso de que el denunciante desee retirar la denuncia antes de que concluya la investigación, la autoridad responsable deberá tratar de que el denunciante lo confirme por escrito.

En todo caso, la contratación podrá seguir adelante si la autoridad emite un Certificado de Interés Público (CIP) en el que se indique que no es de interés público suspender la contratación contemplada mientras se investiga la denuncia; en estos casos la entidad contratante tiene la obligación de publicar el certificado en su sitio web y notificar por escrito a los proveedores afectados que hay un CIP en vigor.

2.4.2. Reclamaciones no cubiertas por la LCP (Revisión Judicial) 2018

Reclamaciones formales

Cuando existan reclamaciones no cubiertas por la LCP, la entidad adjudicadora debe acusar recibo de las quejas por escrito, de acuerdo con el procedimiento de tramitación de quejas de la entidad.

El acuse de recibo debe incluir:

- un resumen de la queja;
- una referencia al procedimiento de tramitación de reclamaciones de la entidad, y
- una indicación del plazo para dar una respuesta formal a la queja.

Cuando un denunciante no esté satisfecho de que su denuncia haya sido suficientemente atendida por la entidad, podrá solicitar una revisión independiente por parte de la entidad sobre el proceso de contratación, y/o buscar asesoramiento a través de otros mecanismos, como el Coordinador de Contratación Pública, el Defensor del Pueblo de la Commonwealth o emprender acciones legales.

Revisión interna independiente por parte de la entidad

Cuando un licitador presente una solicitud de examen adicional de una reclamación, la entidad deberá llevar a cabo una revisión interna independiente del proceso de contratación. Cuando una entidad opte por designar a un revisor interno independiente, este deberá:

- no haber participado en la planificación o realización del planteamiento de mercado, el proceso de evaluación, la adjudicación del contrato o la administración del contrato pertinente, y
- ser independiente de la dirección de cualquier persona que haya participado en el proceso de adquisición y contratación, y
- tener acceso a todos los archivos y registros relacionados con el proceso de licitación.

Coordinador de adquisiciones

El coordinador de adquisiciones es una figura administrativa que depende del Departamento de Finanzas. Se encarga de asistir a la comunidad empresarial en asuntos relacionados con las actividades de adquisición realizadas por el Gobierno australiano, incluida la tramitación de determinadas reclamaciones.

El coordinador de adquisiciones evalúa las quejas sobre un proceso de adquisición y determina si son coherentes con las políticas del Gobierno, incluidas las Normas de Adquisición de la Commonwealth. El coordinador de adquisiciones, en todo caso, no tiene autoridad para obligar a una entidad a reconsiderar la conducta o el resultado de los procesos de licitación de los que dicha entidad es responsable. Adicionalmente, tampoco tiene ningún papel en la gestión de las quejas presentadas en virtud de la Ley de Contratación Pública (Revisión Judicial) de 2018.

3. Cuestiones transversales

3.1. Barreras de entrada

A la hora de abordar el mercado de Australia hay que tener en cuenta una serie de cuestiones que pueden considerarse barreras de acceso, ya que dificultan o encarecen el proceso de la contratación a empresas extranjeras.

El Plan [Buy Australian](#) del Gobierno australiano es una iniciativa diseñada para reforzar la economía del país, promover las industrias locales y crear oportunidades sostenibles para las empresas australianas. El Gobierno australiano ha presupuestado 18,1 millones de dólares a lo largo de 4 años a partir del año fiscal 2023-24 al Departamento de Finanzas para mejorar los procesos de contratación pública para las empresas.

Las medidas se materializan en:

- El **apoyo a la industria local** promoviendo políticas destinadas a aumentar la proporción de la contratación pública dirigida a bienes y servicios fabricados en Australia.
- El **apoyo a las comunidades regionales y a las empresas de las “primeras naciones”** mediante exenciones (*set-aside*) a empresas indígenas: se reservan partes específicas de los contratos públicos a las empresas de las “primeras naciones”.
- Fomento de **prácticas de contratación respetuosas con el medio ambiente**, animando a las empresas a adoptar métodos sostenibles de producción y suministro. Entre los aspectos más destacados figuran:
 - Preferencia por los productos sostenibles de forma que los contratos públicos dan prioridad a las empresas que demuestran prácticas responsables con el medio ambiente.
 - Reducción de la huella de carbono: al abastecerse localmente, el plan minimiza las emisiones del transporte asociadas a la importación de mercancías.
 - Economía circular: incentivando a las empresas para que innoven pensando en el reciclaje y la reducción de residuos.
- **Potenciación de las pymes** mediante la simplificación del proceso de contratación y la reducción de las barreras de entrada. La iniciativa garantiza que las empresas más pequeñas puedan competir eficazmente por los contratos públicos. Al igual que en el caso de las empresas de las “primeras naciones” se establecen *set-aside* para las pymes, lo que garantiza que reciban una parte equitativa de las oportunidades.

3.1.1. Preferencias locales

La política *Buy Australian* ha venido a reforzar otras medidas ya existentes tanto a nivel de la Commonwealth como a nivel estatal y territorial. Entre ellas destacamos las siguientes:

- El **Australian Industry Participation (AIP) Policy** exige a las empresas que gestionan grandes proyectos o proyectos financiados por el Gobierno australiano por encima de determinados umbrales financieros, cumplir con una serie de requisitos establecidos en la AIP a:
 - Los grandes proyectos públicos y privados con un gasto igual o superior a 500 millones de dólares australianos (MAUD) (300 MEUR) para establecer o mejorar una instalación subvencionable están sujetos a la [Ley de Empleo de Australia de 2013](#). En virtud de esta Ley se exige a los proponentes de los proyectos presentar un plan (*Australian Participation Plan*) que garantice que las entidades australianas tengan oportunidades plenas, justas y razonables de presentar ofertas.
 - Las empresas adjudicatarias de contratos, subvenciones, pagos o inversiones del Gobierno australiano por valor de 20 MAUD (12 MEUR) o más están sujetas a requisitos de participación de la industria australiana en la Commonwealth. La empresa participante puede presentar un plan de participación de la industria australiana. Este plan no obliga a recurrir a la industria australiana para los proyectos, solo mostrar cómo ofrecerá estas oportunidades.
- A nivel de estados y territorios, los estados desarrollan políticas **buy local** para facilitar el acceso a la licitación otorgando, por ejemplo, como es el caso de [Western Australia](#):
 - Preferencias que se utilizan para reducir el precio de evaluación de la oferta. El valor de la preferencia de precio se determina en función de si la contratación es de «bienes o servicios» o de «obras». Existen dos tipos de preferencias de precio:
 - Preferencia para empresas regionales: si se hallan dentro de una distancia determinada pueden recibir una preferencia de precio regional.
 - Preferencia por contenido regional: el contenido regional se define como el coste de los servicios o suministros prestados por empresas situadas a una distancia determinada.
 - Preferencias fiscales para encarecer los insumos no australianos, por ejemplo, aplicando un impuesto sobre el contenido importado de un porcentaje a la proporción de la oferta que el ofertante importe de otro país.
- Algunos estados, como Victoria y Queensland, tienen políticas específicas para impulsar la contratación de empresas locales. Ejemplo: el **Local Jobs First Policy** en Victoria exige que ciertos proyectos incluyan un mínimo de participación local.

3.2. Sostenibilidad y diversidad

Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se utilizan en la contratación pública para garantizar que las prácticas empresariales sean sostenibles. Este tipo de medidas ponen en conexión distintas políticas sectoriales con la política de contratación pública. Los criterios ESG, en el caso de Australia, tienen distintos objetivos:

3.2.1. Medio ambiente

Destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los residuos y el consumo de agua. Desde el 1 de julio de 2024, la Política de Contratación Ambientalmente Sostenible (ESP) exige que las contrataciones de alto valor en categorías específicas aborden los impactos ambientales; en concreto: servicios de construcción, productos TIC, uniformes y textiles, y acondicionamiento de interiores de edificios y oficinas.

Esto incluye obligaciones de información y gestión de contratos, en relación con aspectos como: emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de residuos, consumo de energía, uso de productos reciclados, reducción de sustancias nocivas, envases y reciclado al final de la vida útil, con vistas a ajustarse a los principios de la economía circular y al compromiso de cero emisiones netas del servicio público australiano.

Así, y tal y como se define en las CPR, el precio no es el único factor a la hora de evaluar la relación calidad-precio; las autoridades deben tener en cuenta tanto los costes y beneficios financieros como los no financieros. Esto incluye la sostenibilidad medioambiental y los costes a lo largo de toda la vida.

3.2.2. Sociales

Destinados al fomento de la diversidad y el bienestar. En este contexto, la **Política de contratación indígena (IPP)** busca aumentar significativamente la participación de empresas indígenas en la contratación pública que, con carácter previo a 2015, era escasa en la contratación pública de la Commonwealth⁵.

La IPP se fija objetivos anuales para el volumen y el valor de los contratos que la Commonwealth y cada cartera deben adjudicar a empresas indígenas. Así, el Mandatory Set Aside (**MSA**) exige que las empresas indígenas tengan la oportunidad de demostrar la relación calidad-precio antes de una licitación general. La MSA se aplica a las contrataciones que se realicen en zonas remotas de Australia y a todas las demás contrataciones que se realicen íntegramente en Australia por un valor comprendido entre 80.000 y 200.000 dólares (IVA incluido)⁶.

⁵ Desde 2015, el PPI ha generado más de 9.500 MAUD (5,6 MEUR) en oportunidades de contratación para empresas indígenas. Esto ha supuesto la adjudicación de más de 64.000 contratos a más de 3.900 empresas indígenas (30 septiembre 2023).

⁶ 47.000 € y 118.000 € aproximadamente.

Los objetivos de empleo y participación empresarial de los indígenas se aplican a los contratos íntegramente realizados en Australia por valor de 7,5 MAUD (4,4 MEUR) o más en 19 sectores, conocidos como Requisitos Mínimos Obligatorios de Participación Indígena ([MMR](#)).

3.2.3. Gobernanza

La gobernanza en materia de adquisiciones se refiere a los arreglos y sistemas procesales generales establecidos para garantizar que los procesos de adquisiciones adoptados permitan niveles apropiados de control y transparencia. Para garantizar el cumplimiento de la normativa, Australia aplica leyes estrictas contra la corrupción en contratación pública, reguladas por la Commonwealth Procurement Rules (CPR) y la [Ley de Delitos Corporativos](#) de 2013.

Dado que las empresas pueden ser consideradas penalmente responsables de una amplia gama de delitos, incluidos los relacionados con la contratación pública, el gobierno australiano ha implantado normas de contratación pública que obligan a las empresas a revelar determinada información.

Así mismo, las entidades públicas están obligadas a garantizar la rigurosidad y transparencia en los procesos, estando penalizado el:

- Favorecer deliberadamente a un proveedor potencial o perjudicar a otros.
- No garantizar la equidad a todas las partes durante todo el proceso de licitación.
- Divulgar información confidencial a amigos o socios.
- No declarar ni gestionar adecuadamente sus conflictos de intereses.
- Obtener cualquier tipo de ventaja de los licitadores para sí o para otros, como comisiones ilegales, regalos o favores.

El [Commonwealth Fraud and Corruption Control Framework 2024](#) es un instrumento legislativo para todas las entidades de la Ley PGPA que entró en vigor el 1 de julio de 2024. Establece las normas mínimas para que las autoridades responsables de las entidades de la PGPA gestionen el riesgo y los incidentes de fraude y corrupción relacionados con su entidad. La Norma exige a las autoridades responsables que adopten todas las medidas razonables para prevenir, detectar y responder al fraude y la corrupción relacionados con la entidad.

En este marco, las autoridades australianas tienen en cuenta una serie de principios para contrarrestar el fraude y la corrupción en los procesos de contratación; entre ellos, la consideración de que la forma más rentable de hacerlo es siempre la prevención.



Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es



ICEX España
Exportación
e Inversiones